

Editorial

Los desafíos de la crisis energética

Los síntomas de la crisis energética comenzaron a ser evidentes en el verano último con las dificultades de abastecimiento eléctrico durante los días de mayor calor, y quedaron confirmados con los primeros fríos del invierno que está transcurriendo. Para enfrentar este problema crónico, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de proyectos, entre los que se destaca el anuncio de terminar las obras de la central nuclear Atucha II .

La determinación de concluir la construcción de la central atómica merece ser acompañada porque permitirá incrementar la capacidad de generación energética que el crecimiento del país demanda. Sin embargo, ese paso no hace más que poner en evidencia la errática política energética oficial y la incoherencia del congelamiento tarifario, que ha frenado inversiones fundamentales en el sector, las cuales habrían evitado la situación de crisis actual.

Es lógico que la Argentina profundice el desarrollo de la energía nuclear para la generación eléctrica. Pero es necesario garantizar que sólo se hará con fines pacíficos y que todo avance en esta materia no pondrá en riesgo el medio ambiente.

Los efectos de la falta de inversión en generación eléctrica hubieran sido aún más críticos si el Estado no subsidiara cada vez con más intensidad a las empresas prestatarias que deben hacer funcionar cotidianamente equipos obsoletos y costosos, que en condiciones normales hubieran quedado reservados para situaciones de emergencia.

Tanto las centrales eléctricas como las plantas fabriles, han debido recurrir al empleo de combustibles alternativos, como el fuel oil, el gasoil o el gas licuado. Esto ha obligado a construir depósitos y a modificar instalaciones, agregando costos a la ya por sí onerosa utilización de combustibles más caros y más contaminantes que el gas natural. El sector industrial está comprometiendo inversiones en autogeneración con un carácter fundamentalmente preventivo en vista de la eventualidad de cortes que puedan afectar la operación fabril. La autogeneración es una solución poco eficiente por el mayor costo unitario de operación de los equipos de menor capacidad respecto de las grandes centrales.

El congelamiento de tarifas y la colocación de elevados derechos de exportación al petróleo crudo fueron utilizados para amortiguar el traslado a los precios

internos de la fuerte devaluación de comienzos de 2002. Se suponía que gradualmente esas medidas debían flexibilizarse una vez que se superaran los efectos iniciales, ya que de otra manera finalmente se comprometería la producción y el abastecimiento.

La capacidad teórica de generación eléctrica se ha mantenido alrededor de los 24.000 megavatios en los últimos cinco años. La disponibilidad real de esa capacidad mejoró luego de las privatizaciones, pero difícilmente logra hoy superar el 75 por ciento. La información suministrada por Cammesa, la firma mixta encargada del despacho de energía eléctrica, ha indicado para estas últimas semanas una disponibilidad que oscila en bs 17.000 megavatios.

Prácticamente no ha habido incorporaciones de potencia en los últimos cinco años. De una demanda en hora pico de día hábil del orden de 12.000 megavatios en 2002 se ha pasado ahora a más de 17.000 en los días fríos. El sistema está al límite y debe emplear todas sus reservas y además quemar fuel oil o gasoil, donde ello es posible. El costo por lo tanto ha trepado sensiblemente y con ello las compensaciones que debe transferir Cammesa. Los precios que pagan los consumidores domiciliarios están muy por debajo de los costos locales y de los de importación. Por lo tanto, los subsidios han sido crecientes.

El Gobierno ha licitado la construcción de dos centrales de ciclo combinado de 800 MW que se financiará con fondos originados en sobrecargos tarifarios y con la capitalización de acreencias que las empresas eléctricas han acumulado contra Cammesa. Se han recibido tres ofertas que prevén plazos del orden de los 18 meses, aunque con la posibilidad de adelantar el inicio de la generación con ciclo abierto. Se trata de obras encaradas como obra pública, a diferencia de los emprendimientos privados que caracterizaron la década del noventa.

En otro plano, se anunció la reactivación de la construcción de Atucha II, de 745 MW, a un costo de terminación de 1800 millones de dólares. Su puesta en marcha se estima para 2010, cuando reemplazaría la salida, para su reciclaje, de la central nuclear de Río Tercero.

La elevación de la cota del embalse de Yacyretá, expuesto como otro de los proyectos para apuntalar al sector, se enfrenta al problema de la falta de obras de defensa, desagües cloacales y traslados en la ciudad de Encarnación. Los tiempos requeridos son largos a pesar de la voluntad que se ponga para resolver estas cuestiones.

La crisis eléctrica hace imprescindible una modificación de la política de precios y de regulaciones en ese sector. Las consecuencias de los errores cometidos parecen ya inevitables; no obstante cuanto más se demoren los cambios, mayores serán los costos y más traumática la salida.